

# **UNIVERSIDAD SAN PEDRO**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS  
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE DERECHO**



**Tercero civilmente responsable en los delitos por accidente  
de tránsito**  
**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBENER EL TÍTULO  
PROFESIONAL DE ABOGADO**

**Autor:**  
**Julieta Benigna Sanchez Veramendi**

**Asesor**  
**Marcelo Abrego Herrera**

**HUACHO – PERU**  
**2018**



Palabras claves:

Tema	Tercero civilmente responsable
Especialidad	Procesal Penal

Keywords:

Tex	Third civilly responsible
Specialty	Criminal Procedure

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo de investigación se lo dedico a Dios, por ser el que guía día a día mis pasos, como también a mis padres y hermanos por ser los pilares y piezas fundamentales en lo que soy, en toda mi educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo a través del tiempo.

### **ADRADECIMIENTO**

En la vida hay que ser agradecidos con cada cosa que nos toca vivir y con cada logro que se obtiene, siempre mantener la humildad, sin olvidarnos de aquellos que estuvieron constantemente motivándonos, es por ello que doy gracias a mis padres por dedicarme su apoyo constante y haberme brindado su confianza, siendo gratificante ver como se sienten orgullosos por cada logro que voy obteniendo a lo largo de esta carrera.

## ÍNDICE GENERAL

<b>PALABRAS CLAVES .....</b>	<b>i</b>
<b>DEDICATORIA .....</b>	<b>ii</b>
<b>AGRADECIMIENTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>ÍNDICE GENERAL .....</b>	<b>iv</b>
<b>RESUMEN .....</b>	<b>v</b>
<b>CAPÍTULO I.....</b>	<b>6</b>
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	6
<b>CAPÍTULO II .....</b>	<b>9</b>
MARCO TEORICO .....	9
<b>CAPÍTULO III.....</b>	<b>51</b>
ANÁLISIS DEL PROBLEMA.....	51
<b>CAPÍTULO IV .....</b>	<b>53</b>
CONCLUSIONES .....	533
<b>CAPÍTULO V .....</b>	<b>55</b>
RECOMENDACIONES.....	55
<b>CAPÍTULO VI.....</b>	<b>57</b>
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.....	57

## RESUMEN

Por los diferentes medios de comunicación social (radio, televisión, internet o entre otros) se tiene conocimiento de los diferentes accidentes de tránsito ocurridos en las autopistas, carreteras, calles, avenidas, trochas, a nivel rural o urbano, a nivel nacional y contexto extranjero. Con ello el derecho penal toma protagonismo como el órgano de control social que interviene para sancionar al responsable que origina el suceso; la responsabilidad penal generalmente lo tienen los conductores de los vehículos, sin embargo, el sistema nacional también deja la salvedad que dicha atribución o responsabilidad repercuta sobre la víctima, por su accionar se auto expuso en peligro o porque aportó elementos suficientes para su producción.

Se analiza el supuesto de la responsabilidad atribuida a los conductores – sujeto activo del delito. El sistema penal sanciona todas las conductas delictivas que vulneren, lesionen o alteren un bien jurídico protegido, muy aparte de esta sanción penal se le atribuye además las responsabilidades civiles, tanto al autor como a un tercero ajeno quien no tuvo participación en la realización del evento delictivo -accidente de tránsito-, y quien es incorporado porque el nexo con el responsable y como especie salvaguarda en los intereses económicos a favor del agraviado.

En la práctica judicial, se presentan varias situaciones, pues la doctrina no ha establecido lineamientos de manera uniforme, y es el caso cuando ante la incorporación de un tercero civilmente responsable, se presentan las figuras del arrendatario financiero y el arrendador financiero, en razón que se ha suscrito un contrato de leasing y por el cual no se tiene certeza quien debería responder solidariamente. Por lo que, es en este aspecto que el presente trabajo analizara y tomara una postura, respecto a la figura comentada en línea precedentes, apoyándose en fuentes doctrinarias, jurisprudenciales (sentencias, casaciones, recursos de nulidad, etc.) y comentarios de partes intervinientes en el sistema jurisdiccional (jueces, fiscales y abogados litigante

## **CAPÍTULO I**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

El tratamiento procesal de la reparación civil, en especial sobre el Tercero Civilmente Responsable en el Código Procesal Penal, es un tema de relevancia que no ha sido tratado de manera profunda por parte de la doctrina nacional; hace falta un análisis sistemático del mismo, que aborde los innumerables problemas y sutilezas que se presenta en la práctica cotidiana del aparato judicial.

El Tercero Civilmente responsable, es la parte procesal - persona natural o jurídica-, que nace a raíz del vínculo casual que tiene con el imputado, el cual hace la necesidad de afrontar un proceso penal, a fin de que pueda solventar solidariamente el monto de la reparación civil por el daño causado.

En la práctica judicial, se presentan varias situaciones, pues la doctrina no ha establecido lineamientos de manera uniforme, y es el caso cuando ante la incorporación de un tercero civilmente responsable, se presentan las figuras del arrendatario financiero y el arrendador financiero, en razón que se ha suscrito un contrato de leasing y por el cual no se tiene certeza quien debería responder solidariamente.

Por lo que, es en este aspecto que el presente trabajo analizara y tomara una postura, respecto a la figura comentada en línea precedentes, apoyándose en fuentes doctrinarias, jurisprudenciales (sentencias, casaciones, recursos de nulidad, etc.) y comentarios de partes intervinientes en el sistema jurisdiccional (jueces, fiscales y abogados litigantes).



## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEORICO**

#### **2.1 Accidentes de Tránsito:**

##### **2.1.1. Etiología de los Accidentes de Tránsito**

Teniendo en cuenta lo que se investiga, antes de definir se determina las causas de los accidentes de tránsito.

Según el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito: “Accidente: Evento que cause daño a personas o cosas, que se produce como consecuencia directa de la circulación de vehículos”.

Según el Reglamento Nacional de Responsabilidad civil y seguros obligatorios por accidentes de tránsito aprobado por Decreto Supremo N° 024-2002-MTC: “Accidente de Tránsito. - Evento súbito, imprevisto y en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público, causando daño a personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículo automotor, que pueda ser determinado de una manera cierta”. (Morales, 2017, p. 53)

Refiérase entonces a la colisión de dos o más vehículos motorizados, debido a exceso de velocidad, impericia del conductor, cansancio, fallas mecánicas, entre otros; que trae como consecuencia o causa daño directo a las personas.

##### **2.1.2. Definición de accidentes de tránsito**

Indispensable su significado a fin de ubicar los responsables del mismo.

Según Páucar Gómez (2013), la Resolución de Intendencia General N° 037-2008-SEPS/CD61, señala que es:

Toda lesión corporal producida por acción imprevista fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona,

independientemente de su voluntad y que puede ser determinada por los médicos de una manera cierta. En otras palabras, es el perjuicio ocasionado a una persona y/o bien material, en un determinado trayecto de movilización o transporte, debido a la acción riesgosa, negligente o irresponsable, de un conductor, pasajero y/o peatón; como también a desperfectos mecánicos repentinos, condiciones ambientales desfavorables o cruce de animales durante el tráfico.

De acuerdo a es: “todo hecho que produce daños a personas o a cosas, con un automotor, aunque no se encuentre en circulación”.

Conforme a Mesinas Montero, es: “un evento súbito, imprevisto y violento en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público, causando daños materiales y/o personales, pudiendo ser las personas afectadas tanto ocupantes como terceros no ocupantes del vehículo mencionado”. (Vega, p. 52)

Lo define como: “cambio, modificación o alteración, ocurrido en las vías públicas, causado por las personas, los animales o las cosas inanimadas y especialmente por los vehículos, del cual resultan lesiones, daños o perjuicios a la vida humana y a los bienes”. (Valdivia, 2017, p. 173)

Entiéndase al accidente de tránsito como el daño producto del choque de dos vehículos motorizados ya sea daño material o en sí el daño que se le causa a las personas que viajaban dentro del vehículo o se encontraban en el lugar de los hechos o como todo acontecer que se presenta ante la vía pública (calles, avenidas, prolongaciones, caminos carrózaes, trochas, carreteras entre otros), donde participa por lo menos un vehículo automotor en movimiento, la cual ocasiona daños y/o muerte así como genera daños materiales.

### **2.1.3. Naturaleza del accidente de tránsito**

Preciso para entender si el accidente de tránsito es jurídicamente relevante o conlleva a consecuencias susceptibles de indemnizar.

Señala Valdivia Rodríguez (2017), que: Por riesgo se entiende el “peligro o contratiempo posible”, pero no todos los riesgos a los cuales estamos sometidos diariamente son jurídicamente relevantes, igual que los daños: no todos los casos se encuentran comprendidos en bien riesgoso o actividad riesgosa o peligrosa, siendo estas todas aquellas cuya realización o uso normal cree ese riesgo adicional, esto es, situaciones riesgosas que incrementen la posibilidad de daños o siniestros.

Agrega: Los accidentes de tránsito son, por lo general, consecuencia del automóvil, que constituye un bien riesgoso que puede generar un resultado dañoso, siendo aceptado socialmente sus efectos nocivos; sin embargo, ello no implica asumir cubriéndolo o pagándolo mediante un sistema organizado de internalización de las externalidades. (Valdivia, 2017, p. 175)

Entiéndase que se determina la naturaleza de los accidentes de tránsito con la finalidad de determinar si lo mismos son consecuencias que jurídicamente necesitan determinar una reparación civil o una indemnización a las personas que han sufrido el daño causado.

## **2.2 Responsabilidad Civil**

### **2.2.1. Definición de la Responsabilidad Civil**

Luego de un accidente de tránsito es preciso enfocarnos si del daño producido nace alguna obligación o responsabilidad que conlleve a una reparación civil.

Expresa: “sanción que impone el ordenamiento jurídico como consecuencia de la producción de un daño. El que con sus lícitos o ilícitos causa daño a otro

queda sometido a responsabilidad civil, y esta consiste en la indemnización del daño”. (Torres, 2014, p. 896)

(Torres Vásquez, 2012). Señala citando a Castañeda: “es civilmente responsable, cuando existe la obligación de reparar un daño sufrido por otro. La responsabilidad se concreta en la obligación de indemnizar, o sea, de resarcir, de reparar”.

Al referirse a la responsabilidad civil, señala que “en termino estrictamente generales, dicese de la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la perdida causada, el más inferido o el daño originado”. (Cabanellas , 1981, p.191)

Tintaya Cari (2015) refiere que: El Código Civil peruano mantiene una separación entre responsabilidad civil contractual y responsabilidad extracontractual, bajo el criterio que el origen del daño causado difiere en ambos tipos, siendo que en la responsabilidad civil se produce una violación de un interés determinado o determinable, mientras que en la responsabilidad extracontractual lo que se da es la violación de un deber genérico. En ese orden de ideas debe descartarse que ambos tipos de responsabilidad tengan como común denominador la noción de antijuridicidad y el imperativo legal de resarcir los daños causados.

Rifa Soler (1981), describiendo el Código Procesal Español refiere “que la responsabilidad civil de un hecho delictivo calificado como delito o falta obliga a reparar los daños y perjuicios causados u comprende tanto la restitución de la cosa, como la reparación del daño ocasionado, y la indemnización de perjuicios materiales y morales.”

En consecuencia se puede definir a la responsabilidad civil a la consecuencia que se genera del daño ocasionado que por la magnitud necesita ser reparado.

### 2.2.2. Naturaleza jurídica de la Responsabilidad

Necesaria a fin de verificar de donde surge o nace la responsabilidad adquirida.

Para Tintaya Cari (2015) existen tres teorías respecto a la naturaleza jurídica de la responsabilidad:

**a) Teoría subjetiva.-**

Señala que el crédito constituye una potestad del acreedor. El derecho subjetivo constituye un poder atribuido a una voluntad y de la cual nace la obligación. Esta tesis confunde el sujeto pasivo de la obligación con el objeto de la misma.

**b) Teoría objetiva.-**

Concibe al crédito como un título a la satisfacción de un interés. Privilegia el interés del acreedor en el cumplimiento de la prestación sobre el vínculo entre los sujetos y la conducta del deudor, de donde resulta que el ordenamiento jurídico protege dicho interés. Citando a Llambías hace una crítica a esta teoría señalando que "...subestima el elemento personal que siempre debe estar en la primera línea del estudio de la obligación, por lo mismo que es común al deber impuesto por el derecho natural y por el derecho positivo. Además, esa subestimación del deber de satisfacer la prestación desemboca en la equivocada creencia según la cual el deudor no está precisado a pagar no sería un deber suyo categórico, sino hipotético, en tanto y cuanto quiera no incurrir en responsabilidad. Finalmente, el elemento personal de la conducta del deudor está presente aun en su responsabilidad por el incumplimiento, pues, para que surja esa responsabilidad por el daño experimentado por el acreedor es necesario que promedie la culpa del deudor."

**c) Teoría del vínculo jurídico complejo.-**

Concepción originada en Alemania, habiendo alcanzado gran aceptación. Postula que en la obligación hay un primer momento vital que se caracteriza por el deber de satisfacer la prestación que pesa sobre el deudor y que para el acreedor es la expectación de la conducta debida. La prestación se deriva de un mandato de la ley natural y de la ley positiva, como presión psicológica sobre el deudor que lo urge al comportamiento esperado, con independencia de las

sanciones que puedan corresponder a su infracción a lo debido. De parte del acreedor, como crédito, es la expectativa de la satisfacción de la prestación.

La reparación civil surge de la obligación de reparar algo que se ha dañado.

### **2.2.3. Requisitos de la Responsabilidad Civil**

No todos los daños son susceptibles de una reparación civil, por lo que el análisis del mismo es determinante, para identificar no solo los daños a reparar, sino también, quienes serán los responsables de dicha reparación.

Araujo Moreno (2017), cita a Aníbal para enumerar los siguientes requisitos:

a) **Antijuricidad.-**

Denominada también acto o conducta contrario al derecho, es uno de los requisitos fundamentales de la responsabilidad civil en general; en efecto, se trata de un comportamiento, un acto humano al que se considera como causa de un daño. Esta acción humana puede consistir en una acción positiva o en una acción negativa, omisión o abstención. En el último caso, no toda abstención es fuente de responsabilidad, sino cuando exista un deber especial de actuar.

En resumen no solo se debe hablar de responsabilidad civil extracontractual cuando se haya causado daños mediante conductas prohibidas por normas de contenido penal o sin ellas, sino también en todos los demás casos en los cuales la conducta por sí misma es antijurídica o contraria al derecho en general.

b) **Daños.-**

El daño es otro presupuesto necesario para la configuración de la responsabilidad extracontractual. Consiste en toda lesión a un interés jurídicamente protegido, ya se trata de un derecho patrimonial extramatrimonial. En ese sentido refiere Misipietra Gálvez, el daño encierra diferentes definiciones de acuerdo al momento en que se pretendan analizar; así por un lado encontramos al daño “evento”, que se manifiesta como la lesión aun interés jurídicamente tutelado, mientras que

dese otra perspectiva, el daño puede ser apreciado como los efectos que se desprenden de dicha lesión, a los cuales se ha denominado genéricamente daño “consecuencia”. Los daños pueden ser: Patrimoniales, extra patrimoniales.

c) La Causalidad:

Llamado relación de causalidad, vale decir una relación de causa a efecto, entre el acto responsable y el daño, por eso, el que causa daño a otro está obligado a reparar el daño causado, esto quiere decir, que el daño ocasionado debe ser consecuencia de la conducta antijurídica del autor para que se configure el supuesto de responsabilidad civil. En el campo de la responsabilidad contractual, la causalidad debe entenderse bajo la óptica de una causa inmediata y directa, en la responsabilidad extracontractual corresponde la causa adecuada.

d) Imputabilidad (Factor de Atribución)

Es otro presupuesto de la responsabilidad civil conocida en la doctrina como “factores de atribución legal del daño”. Para que el hecho antijurídico cause un daño al otro tiene que ser imputado a un sujeto (responsabilidad subjetiva) o que aquel actúe mediante el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa (responsabilidad objetiva). Existen varios sistemas que reciben la calificación de sistemas de atribución, estos son:

- i. Sistema subjetivo: este sistema se construye sobre la culpa del autor, constituyendo ella el factor de atribución subjetivo. Ciertamente la culpa, latu sensu comprende tanto la negatividad o imprudencia como al dolo o el ánimo deliberado de causar daño a la víctima. La noción de culpa no solo exige que sea causado un daño a la víctima. La noción de culpa no solo exige que sea causado un daño a la víctima, sino que el mismo sea consecuencia del dolo o la culpa del autor, caso contrario, por más que se acredite el daño y la relación causal, no habrá responsabilidad civil. Corresponde a la responsabilidad contractual regulada por el Artículo 1321 del

Código Civil, y en Artículo 1969 del mismo, que regula la responsabilidad extracontractual subjetiva o culposa.

- ii. Sistema objetivo: también este sistema se construye sobre la noción del riesgo creado, constituyendo esta noción de riesgo el factor de atribución objetivo. El significado de riesgo creado supone un acto que atribuye objetivamente el deber de reparar en virtud de la creación de un riesgo por un acto anormal ponderando según las condiciones normales de la época y del ambiente, está en el artículo 1970° de Código Civil Peruano que prescribe “Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa cause un daño a otro, está obligado a repararlo.”

Todos los bienes y actividades que se utilizan en la vida moderna para la satisfacción de las diferentes necesidades existentes suponen la existencia de un riesgo ordinario o común para las personas; sin embargo existen también, cada vez en mayor número, bienes y actividades que significan un riesgo adicional al ordinario, tales como los automotores y otros.

El estudio de la naturaleza de la reparación civil enseña a identificar en qué casos esta obligación o responsabilidad se vuelve legalmente una responsabilidad civil o jurídica que necesita ser reparada, pues no solo se necesita del daño causado, sino determinar que dicho daño fue a consecuencia de la negligencia o irresponsabilidad del agente que produjo el daño.

## **2.3 Teoría de la Reparación Civil**

En el transcurso del tiempo han surgido algunos planteamientos respecto a cómo abordarse el tema de la reparación civil, se ha pensado que este tema debe ser analizado, considerado y resuelto por el derecho civil, ya que por su naturaleza es a quien le corresponde abordarlo, sin embargo, existen estudios que sugieren lo contrario.

Iman Arce (2015) señala:



Así tenemos:

- i. El Código Procesal Penal Francés de 1808 le otorgaba a la víctima la posibilidad de ser considerada en el proceso, no tenía mayor participación en la forma como debía de resolverse el problema. Posteriormente fue entendida como una medida accesoria de carácter restitutorio que buscaba la indemnización del daño causado a consecuencia del delito; luego, asume otra función más, un medio autónomo de sancionar al generador del hecho ilícito.
- ii. Es Ferri, el que postula que la reparación debería de formar parte de la sanción que se imponía al procesado, dando origen a su instauración y persecución a cargo del Estado. La protección se funda en la defensa social como la obligación del delincuente hacia la parte ofendida y como sanción que sustituya la pena de reclusión en pequeños delitos; pero el Estado sobredimensiono su actuación pasando a apropiarse del conflicto, dejando de lado a la víctima, predominando la aplicación de la pena de prisión.
- iii. Carreras sostiene, que la reparación como sanción resulta un acierto pues reflejaría una forma de hacer justicia para la sociedad, el condenado y el ofendido; constituyendo de esta forma un antecedente importante y revelador de la preocupación de la situación de la víctima en el proceso penal y además un cuestionamiento a la naturaleza jurídica de la reparación.
- iv. Mapelli Caffarena-Terradillos Basoco afirman, que por sí solo la reparación no puede ser un elemento determinante a la hora de suprimir la pena.
- v. Cosacov refiere que la existencia de mecanismos punitivos siempre debe refugiarse en la noción de merecimiento, antes que en criterios externos de justificación. La exclusión de la víctima refuerza aquella noción de merecimiento sin sujeto acreedor.
- vi. Gracia Martín mostrándose contrario a la introducción de la reparación civil en el ámbito penal y glosando a Roxin señala que “mediante la obligación de reparación se pone al autor en una relación con el daño y con

la víctima, esa relación puede suponer efectos favorables para la resocialización y una reparación espontánea y voluntaria que puede suponer una reconciliación entre autor y víctima, una solución al conflicto en el sentido de la prevención de integración.”.

- vii. Bustamante Ramírez sostiene que la reparación es un primer escalón que busca que el conflicto originado a consecuencia del delito retorne a las partes, debido a que de esta forma permite un acercamiento entre el ofensor y la víctima.

De las diferentes posiciones respecto a que, si la reparación civil debe ser abordada en el derecho penal o en el derecho civil, se puede concluir que la posición correcta sería abordarlo como una sanción impuesta a quien cometió el delito; por lo que su tratamiento es correcto aplicarlo en la vía penal.

## **2.4 Tercero Civilmente Responsable**

Ante la producción de un daño – comisión de un delito-, los responsables directos del mismo son los autores o partícipes – cómplices-, que participen en la comisión del hechos, sin embargo, nuestro sistema procesal a fin de evitar, la impunidad del resarcimiento por el daño causado, facultad al llamamiento de un tercero ajeno solidario, quien responderá con el autor directo, en el extremo de la reparación civil, del lesionado o agraviado. En ese caso, la responsabilidad del obligado directo se fundamente en la calidad de ejecutor del daño. Estableciendo que este es el responsable directo, distinto del tercero civil, que es el responsable pero no el ejecutor del daño.

“La responsabilidad civil directa se funda en el propio hacer u omitir culpable que constituye la causa o la condición del resultado dañoso y, por ende, tratándose de responsabilidad civil derivada del delito, la obligación de resarcir viene atribuida directamente por la Ley a los criminalmente responsables” (Aranguena, 1991, P.186).

Por otro lado, hay contemplar que existen supuestos en los cuales puede comprender como responsables civiles a personas ajenas de la producción de los daños materiales, a los cuales lo denominan terceros civiles, los cuales comprenden a responsables no ejecutores de los hechos, solo con la finalidad de garantizar o respaldar el pago de la reparación civil.

En ese sentido Tomas Villegas (2008) indica que:

*“Como quiera en ciertos casos el obligado directo o causante del daño, no se encuentra en la posibilidad de correr con el costo del mismo, y dado que la responsabilidad civil se ha creado precisamente para buscar y lograr la reparación de los daños, es el propio ordenamiento jurídico el que impone a ciertas personas la calidad de garantes de la reparación de los daños ocasionados por las personas con quienes se encuentran especialmente vinculadas; a los que como en todos los casos de garantía les impone la obligación solidaria de responder conjuntamente con el causante directo. Es así como el ordenamiento jurídico, ha establecido que constituye un fundamento o razón para la atribución de responsabilidad civil, la garantía de reparación a cargo de las personas encargadas del cuidado, selección, dirección o instrucción de otras personas o a los titulares de bienes especialmente peligrosos o riesgosos. En este sentido, los artículos 1075° -ultima parte- y 1981° del Código Civil, atribuyen la calidad de garantes de la obligación resarcitoria de sus respectivos dependientes o personas bajo su cuidado, a los principales –empleadores-, o a los representantes –legales. Tutores, curadores de personas incapaces- esta atribución de responsabilidad se sustenta en factor de atribución objetivo, por lo que también se tratara de una responsabilidad objetiva. En tal sentido, no es necesario que se acredite la concurrencia de culpa en la producción del daño o en la vinculación del tercero con el causante directo. Ese factor objetivo de atribución de responsabilidad queda mas claro en las disposiciones de la Ley General de Trasportes y Tránsito Terrestre N° 27181 y el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, Decreto Supremo N° 024-2002-MTC*

*(que reglamenta a la "referida ley en lo atinente a la responsabilidad civil por accidente de tránsito), donde se establece claramente que la responsabilidad civil entre conductor, propietario del vehículo y prestador de servicio, es objetivo (art.29/ de la Ley y 2° texto Único Ordenado de Reglamento D.S..N° 024-2002-MTC). En ese orden de ideas, se desvirtúa la atribución o presunción de culpa in eligendo, culpa in vigilando, culpa in inspiciendo, culpa in instruendo, etc.,; con las que tradicionalmente se ha pretendido fundamentar la responsabilidad del tercero vinculado al agente directo del daño, en la atribución de culpa o presunción juris et de juri de culpa, y no en una atribución objetiva. Estos criterios obviamente no resultan claros para sistemas de responsabilidad civil cuyo fundamental factor de atribución es la culpa, como el caso del sistema español, donde la doctrina y la jurisprudencia tiene que hacer grandes esfuerzo para fundamentar la responsabilidad por riesgo y demás criterios de responsabilidad objetiva, lo cual nuestro sistema así como también por otros como el italiano o el argentino, no significa mayor problema." (p.165)*

Siendo esos los factores de atribución de responsabilidad civil, Tomas Villegas (2005), indica que "Estos son los supuestos en los que un proceso penal seguido contra el causante del daño y autor del delito, se comprende como tercero civil a otra persona no causante (natural o jurídica), quien no ha intervenido en la materialización del daño ni en la comisión del delito, y sin embargo resultad vinculada al resarcimiento por el factor de atribución de responsabilidad "garantía de reparación".

Cesar San Martin (2006) entiende por "tercero civil obligado aquel que sin haber participado en la comisión del delito responden civilmente por el daño causado."

Víctor Cubas Villanueva (1998), señala que el "(...) Tercero Civilmente Responsable es la persona natural o jurídica que sin haber participado en la comisión del delito, tiene que pagar sus consecuencias económicas. Su responsabilidad nace de la ley civil y no de una ley administrativa o de otra índole".

Sánchez (2006) no dice que:

“El Tercero civil responsable es aquella persona natural o jurídica que sin haber participado en la comisión del hecho punible interviene en el proceso penal a efecto de responder económicamente a favor del agraviado. Esta persona natural o jurídica no causante del delito, aparece como un tercero solidario del inculpado con quien le une algún tipo de relación especial. La ley civil establece que aquél que tenga a otro bajos sus órdenes “responde por el daño causado por éste último” si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo.”

Siendo ello, así Tomas Villegas (2005) manifiesta “En el caso del tercero responsable civilmente en el proceso penal, se trata de un típico caso de responsabilidad vicaria”, pues para poder hablar de tercero civilmente responsable, se presupone la existencia de un obligado directo (agente del delito) y a este agente necesariamente se tiene que imputar dolo o culpa en su actuar, por estar proscrita toda responsabilidad objetiva.”

Por su parte, al analizar al civilmente responsable, refiere que es el “responsable indirecto en el ejercicio de la acción civil reparatorio del daño privado soportando como consecuencia del hecho delictivo, es un tercero no vinculado a la comisión del hecho. Este tercero responde por la reparación del daño causado por su pupilo o dependiente, por imperio de la ley sustancial que así lo imponga” (Moras, 2002, p.80).

En ese sentido compartimos con los autores nacionales, por lo cual concluimos que el tercero civil responsables o tercero ajeno responsable es aquella persona natural o jurídica, que se incorpora en el proceso penal, a fin de salvaguardar los intereses resarcitorios del agraviado, pese que este no ha tenido un vínculo directo ni indirecto con la lesión provocada, sin embargo, se incorpora porque tienen un vínculo de hecho o derecho con el autor, siendo desde ese momento que adquiere ciertos derechos con los que van hacer frente dentro del proceso penal a fin de salvaguardar sus intereses.

En ese sentido, indica que el tercero civilmente “actuara en el juicio con las mismas facultades que las demás partes y concretamente a las atribuidas al imputado, pero referidas exclusivamente al contenido civil que se les reclama”. (Rifa, 2006, P.143).

Al respecto el artículo 113° del Nuevo Código Procesal Penal reconoce al tercero civilmente responsable al asegurador, siempre y cuando éste ha sido contratado para responder por la responsabilidad civil.

Por lo que indica que “por cuanto por el daño producido va a tener que cubrir, dentro de los límites de lo acordado, la reparación indemnizatoria que se imponga por sentencia” (Moras, 2002, p. 80).

Asimismo Arangüena Fanego (1991) refiere que:

“(...) en el ámbito civil en general, el tercero puede responder como único deudor, por los daños ocasionados por el causante directo, tales son los casos del representante legal de un incapaz sin discernimiento (artículo 1976 del Código Civil), en cuyo caso la responsabilidad civil del tercero es directa y esta “fundada en la propia culpa del obligado – tercio- con base en el deber asumido en su condición de titular de la patria potestad o guarda legal”. Por lo que en estos supuestos el tercero ajeno, responde de manera directa como obligado principal, dejando de lado al causante directo como responsable.

No obstante, Tomas Villegas (2005) resalta una diferencia, indicado que “(...) responsabilidad vicaria del empleador o en general los casos de tercero responsable civilmente en el proceso penal; ya que en estos casos, por haber actuado el causante directo mediando dolo o culpa”, por lo que su accionar del causante directo se le puede atribuir la obligación principal.

Aunado a ello para fraseando a Tomas Villegas (2005), cabe mencionar que en transcurso de la legislación anterior, no se apreciaba nada respecto a esta institución,

dado que, el Código de 1924 y sus respectivas modificatorias, no hacía referencia alguna, bastándose solamente en la aplicación del artículo 100° del Código de Procedimiento Penales, en lo relativo a la medida cautelar de embargo de bienes, el mismo que dispone que se trabara el embargo sobre los bienes del tercero civil, cuando el investigado no cuente con los recursos suficientes para cubrir el integro de la reparación civil. Razón por la cual se estableció al tercero civil como garante del obligado principal (directo) y respondida solidariamente o subsidiariamente. Sin embargo, con posterioridad al Código de Procedimientos penal, el Código Penal en su artículo 95° estableció que el tercero civil y el agente del delito son solidariamente responsables respecto al pago de la reparación civil, disposición que resulta concordante con el artículo 1981 y 1983 en cuanto a la solidaridad del tercero y del directamente causante del daño. Por lo que luego se estableció con predominancia esta figura en la implementación del nuevo código procesal penal 2004. Siendo que la legislación española establece el mismo criterio del tercero civil subsidiario en su artículo 12° del Código Penal “(...) *son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente: (...) 3° Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos o faltas cometidos en los establecimiento de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que este no se hubiera producido sin dicha infracción*”.

## **2.5 Oportunidad de incorporación del Tercero Civil Responsable dentro del proceso penal**

Preciso analizar dicho tema, a fin de que el daño ocasionado sea de una u otra forma reparado por uno o más sujetos obligados, así también a fin de que no vulnere el debido proceso y pueda el tercero civil responsable ejercer todos sus derechos.

A pesar que la persona natural o jurídica calificada como Tercero Civil Responsable debe tener la posibilidad de oponerse a ser considerado como tal,

muchas veces se le incorpora indebidamente al proceso penal, esto es, cuando concluye la investigación preparatoria, la etapa de juzgamiento o, incluso, durante la ejecución de sentencia, porque se malentiende que lo principal en el referido proceso es pronunciarse sobre la pretensión penal. Esta forma de incorporar al Tercero Civil Responsable al proceso, evidencia la manifiesta vulneración de garantías procesales que se producen en contra del referido sujeto procesal, puesto que se le priva de la posibilidad de contradecir la promoción del ejercicio de la acción penal. (Padilla, 2016, p. 78 – 79)

La Corte Suprema de Justicia de la República (2011) precisa: La constitución en actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la Investigación Preparatoria. En este punto lo que cabe dilucidar es si la petición de constitución en actor civil puede hacerse en la fase de diligencias preliminares –que integra la investigación preparatoria-, o si resulta necesario que se haya formalizado la continuación de la Investigación Preparatoria. Asimismo son requisitos para constituirse como actor civil lo siguiente:

1. La solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante el Juez de la Investigación Preparatoria.
2. Esta solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad:
  - a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de Ley de su representante legal;
  - b) La indicación del nombre del imputado y, en su caso, el tercero civilmente responsable, contra quien se va a proceder;
  - c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión; y
  - d) La prueba documental que acredita su derecho conforme al artículo 98°.

El artículo 101° del Nuevo Código Procesal Penal, establece que “la constitución en actor civil (tercero civilmente) deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria”, en tanto, se establece que a la culminación investigación



preparatoria, delimita a la participación de las partes procesales, en la que se estipula el rol determinado dentro del proceso, dado que, siendo ello se vulneraría a todas luces su derecho de defensa y a la contradicción.

Por otro lado el artículo 112 numeral 3 del Código Penal, establece que “solo será apelable la resolución denegatoria de la constitución del tercero civil”, dejando de ello la posibilidad de interponer un recurso de apelación, sin embargo gran parte de la doctrina, considera que la presente integración o incorporación, por tratarse de un proceso sencillo o simple, que solo resuelve el vínculo jurídico del imputado y el presunto tercero civil, por lo que una vez acreditado dicho vínculo, en una apelación no habría nada más que discutir.

## **2.6 El Contrato de Leasing**

### **2.6.1. Definición del Contrato de Leasing**

En muchas ocasiones, el tema de la reparación civil en un accidente de tránsito se incluye el tema del vehículo sujeto a leasing, por consiguiente, se hace un breve paso por dicha figura para analizar la responsabilidad a la que se encuentra sujeta.

Villa Santander (2016) nos indica: La palabra “leasing” según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española – DRAE, se define como arrendamiento con opción de compra del objeto arrendado. Es un negocio jurídico en virtud del cual una sociedad le entrega a una persona la tenencia de un determinado bien productivo, para que lo use y obtenga provecho de él, a cambio de una renta periódica que se determina, principalmente, en función del goce concedido y de la amortización de su costo de adquisición, en el que, además, se le confiere al locatario o usuario, quien debe hacer restitución al vencimiento del plazo acordado, la opción ejercitable en ese mismo momento de adquirir la propiedad, mediante el pago de una suma de dinero establecida desde el comienzo por las partes.

Araujo Moreno (2017), expresa: Citando a Camacho, “Quien desea disfrutar de un bien, acude a una empresa de leasing, para que, adquiriéndolo a tal fin de su constructor o fabricante, le ceda su uso por todo el tiempo que se prevé tendrá de vida económica o útil, a cambio de una contraprestación en dinero, que el usuario paga fraccionadamente y que asciende al importe que la empresa de leasing satisfizo al fabricante, incrementando en los gastos e intereses del aplazamiento más el beneficio, empresarial. Se reconoce al usuario la facultad de adquirir el dominio del bien pagando, al cumplirse el termino previsto, el valor residual que corresponda”

“El contrato de arrendamiento financiero, conocido como contrato de leasing, permite al arrendatario obtener del arrendador el uso y disfrute de un bien durante un periodo de tiempo establecido en el contrato y a cambio de una renta o pago fraccionado. Al término establecido: el arrendatario tiene derecho a optar por las siguientes opciones:

- El arrendatario puede comprar el bien objeto del contrato (cláusula de opción a compra).
- Puede prorrogar el plazo establecido en el contrato y continuar con el uso o goce temporal del bien.
- El arrendatario puede acordar con el arrendador la venta del bien a un tercero participando en el precio de venta.
- Por ultimo también puede restituir el bien al arrendador”.

Esta figura jurídica se va fortaleciendo cada vez más con el acontecer de la cotidianidad; se rige por su propia normatividad, y de acuerdo a su estudio permite que un individuo, a través de un contrato, el uso o disfrute de un vehículo motorizado.

### **2.6.2. El leasing en el Perú**

Dicha figura no es muy antigua en la legislación nacional, por lo que en este punto se hace una breve sinopsis de su paso por la legislación peruana.

Para Morales Gonzales (2017), se tiene que:

El leasing fue introducido legalmente bajo la denominación de “arrendamiento financiero” en el artículo 2 del Decreto Ley N° 22738, del 23 de octubre de 1979, por el cual se amplió el ámbito de actuación de las empresas financieras para operar con este tipo de contratos.

Este dispositivo modificó las normas contenidas en el Decreto Ley 18957, del 17 de setiembre de 1971, que regulaba la actividad de las empresas financieras, facultando, al mismo tiempo, a estas instituciones a adquirir inmuebles, maquinarias, equipos y vehículos destinados a este tipo de operaciones. Poco tiempo después se dictó el Decreto Legislativo 212, del 12 de junio de 1981, estableciendo que además de las entidades financieras, podrían operar con este mecanismo contractual cualquier empresa debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Posteriormente, se dicta el Decreto Legislativo 299 (en adelante LAF), del 29 de julio de 1984, con la finalidad de reactivar el aparato productivo y la economía nacional, derogando el Decreto Legislativo 212 y sus normas reglamentarias y complementarias.

Como puede apreciarse, de la evolución normativa del leasing en el Perú, dicha figura nace como un mecanismo contractual para otorgar financiamiento a las empresas para adquirir bienes e insertarlos en su actividad productiva, y para que de esta forma se promueva la economía y el crecimiento económico del país.

Como se aprecia esta figura nace de un contrato, y debería regirse bajo las normas contractuales; sin embargo, por su complejidad cuenta con propia norma de arrendamiento financiero, que permite en muchos casos solucionar conflictos de intereses cuando se encuentre la empresa leasing constituido como tercero civil responsable.

## **2.7 Responsabilidad civil frente a terceros cuando existe un contrato de leasing.**

### **2.7.1. El propietario no conductor como responsable solidario en los accidentes de tránsito**

Este tema es relevante en la investigación, por lo que su análisis no puede ser indiferente, para dejar en claro cuando una empresa leasing es constituido como tercero civilmente responsable.

La doctrina tiene una posición ecléctica en la cual lo ideal es que la Empresa de Leasing tenga responsabilidad frente a terceros, pero que tenga que evitar enfrentarse a la obligación de indemnizar, cargando dicha responsabilidad a la aseguradora. Es conveniente que sea la empresa de leasing la que soporte el pago de las primas, pues precisamente el seguro es el escudo de esta frente ante la posibilidad de tener que responder objetivamente frente a terceros dañados, además generalmente la empresa de leasing estará en mejor posición económica para asumir los riesgos por los daños que puedan producirse y para deludir los costos en sus operaciones económicas. (Araujo Moreno, 2017, p. 38 – 39)

Morales Gonzales (2017) enfatiza: En materia de accidentes de tránsito no estamos ante una solidaridad impropia ya que cabe una individualización de los comportamientos del conductor, del propietario no conductor y del prestador de servicios de transportes.

El conductor, como persona natural, siempre será el autor directo del accidente por lo que será responsable por hecho propio. El propietario no conductor, que podrá ser una persona jurídica o natural, solo podrá ser responsable por hecho ajeno, lo cual implica que su conducta tiene una naturaleza distinta que la del conductor. Por lo tanto,

estamos ante un caso de obligación fragmentada, y no una imputación como grupo indeterminado. Es así que el conductor si es responsable, también es responsable el propietario no conductor y el prestador de servicios de transporte, ya que a cada sujeto se le debe aplicar un juicio de imputación de responsabilidad.

La responsabilidad del propietario se ha intentado justificar en la doctrina del riesgo, sin embargo, el propietario no necesariamente será el conductor del vehículo, sino que podrá serlo un tercero (arrendador, un empleador, o un padre de familia). Es así que la responsabilidad por riesgo se aplica a quien desarrolla la actividad especialmente riesgosa, por lo que corresponde aplicársela exclusivamente al conductor, y solo podrá aplicarse dicha responsabilidad por riesgo a una persona jurídica en la medida que sea la titular de la actividad especialmente riesgosa. Al propietario no conductor también se le puede atribuir responsabilidad subsidiariamente siempre y cuando concurren determinadas relaciones que lo justifiquen.

De esta forma teniendo en cuenta que el arrendatario es quien se beneficia directamente del uso del vehículo objeto de leasing es quien debe asumir los costos de aseguramiento del mismo. Sin embargo, no se puede sostener una supuesta responsabilidad por aseguramiento en la medida que los únicos factores de imputación de responsabilidad civil reconocidos legalmente son los de culpa y el riesgo.

La doctrina muestra una posición firme respecto a que la empresa de leasing, constituido en un proceso penal como el tercero civilmente responsable, es responsable solidariamente en conjunto con el actor del delito de la reparación civil que se imponga en la sentencia.

### **2.7.2 La carga de la prueba en la responsabilidad civil por accidentes de tránsito**

La responsabilidad civil es tratada en un proceso penal con normas civiles, sin embargo es preciso identificar si porque es un proceso penal la carga de la prueba le corresponde a quien acusa, llámese fiscal, o porque se rige por las normas civiles le corresponde la

carga de la prueba a quien solicita la reparación civil o a quién incluye al tercero civilmente responsable dentro del proceso penal.

Valdivia Rodríguez (2017) explica: Citando a Taruffo, qué parte debe perder la causa por no haber probado un hecho principal, hace falta un criterio que determine: “quien debe probar qué” en cada situación, afrontándose este problema normalmente por medio de distinciones teórico –jurídicas acerca de los hechos principales del caso.

Son necesarios dos aspectos: por un lado, cómo el juez debe sentenciar cuando no aparezcan en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben sustentar su decisión; por otro lado, la responsabilidad de las partes que tienen para que los hechos que sirvan de sustento de sus posiciones aparezcan demostrados; por lo que la carga de la prueba en este tipo de responsabilidad le incumbe al autor, teniéndose en cuenta que la responsabilidad civil por accidente de tránsito es objetiva por calidad de bienes riesgosos y por el riesgo creado por los vehículos puestos en circulación, así como por la irrelevancia de que el agente dañante tenga que probar su ausencia de culpa, teniéndose solamente que acreditar el daño y la relación de causalidad, tomando en consideración los supuestos de ruptura de nexo causal y la concausa, asimismo teniendo esta responsabilidad un valor solidarístico que implica poder responder a favor de la víctima.

En la demanda de indemnización por daños y perjuicios, no basta que solo se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño ocasionado sin respaldo probatorio, porque estas no serán valoradas por el juzgador, al no tratarse de hechos notorios o que se presuman, sino de situaciones cuya comprobación por mandato legal le corresponde al demandante estando a la naturaleza de esta pretensión demandada. Los medios probatorios servirán para conocer la existencia de los daños y su extensión, para efectos del que el juez proceda a la cuantificación del daño en su real dimensión y conforme a lo peticionado, teniéndose en cuenta que el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite.

## **CÓDIGO PENAL**

### **Decreto Legislativo N° 635**

#### **Título VI - De la Reparación Civil y Consecuencias Accesorias**

##### **Capítulo 1**

**Artículo 92°.- Reparación civil.-** La reparación civil se determina conjuntamente con la pena.

**Artículo 93°.- Contenido de la reparación civil.-** La reparación comprende:

1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y
2. La indemnización de los daños y perjuicios.

**Artículo 94°.- Restitución del bien.-** La restitución se hace con el mismo bien aunque se halle en poder de terceros, sin perjuicio del derecho de éstos para reclamar su valor contra quien corresponda.

**Artículo 95°.- Responsabilidad solidaria.-** La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados.

**Artículo 96°.- Transmisión de la reparación civil a herederos.-** La obligación de la reparación civil fijada en la sentencia se transmite a los herederos del responsable hasta donde alcancen los bienes de la herencia. El derecho a exigir la reparación civil se transfiere a los herederos del agraviado.

**Artículo 97°.- Protección de la reparación civil.-** Los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros.

**Artículo 99°.- Reparación civil de terceros responsables.-** Procede la acción civil contra los terceros cuando la sentencia dictada en la jurisdicción penal no alcanza a éstos.

**Artículo 100°.- Inextinguibilidad de la acción civil.-** La acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal.

**Artículo 101°.- Aplicación suplementaria del Código Civil.-** La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil.

## **CÓDIGO PROCESAL PENAL**

### **Decreto Legislativo N° 953**

#### **Sección II - La Acción Civil**

**Artículo 11°.- Ejercicio y contenido.-** 1. El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. 2. Su ámbito comprende las acciones establecidas en el artículo 93 del Código Penal e incluye, para garantizar la restitución del bien y, siempre que sea posible, la declaración de nulidad de los actos jurídicos que correspondan, con citación de los afectados.

**Artículo 12°.- Ejercicio alternativo y accesoriedad.-** 1. El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional. 2. Si la persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que se disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna consideración legal, la acción civil derivada del hecho punible podrá ser ejercida ante el Orden Jurisdiccional Civil. 3. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda.

**Artículo 13°.- Desistimiento.-** 1. El actor civil podrá desistirse de su pretensión de reparación civil hasta antes del inicio de la Etapa Intermedia del proceso. Ello no perjudica su derecho a ejercerlo en la vía del proceso civil. 2. El desistimiento genera la obligación del pago de costas.

**Artículo 14°.- Transacción.-** 1. La acción civil derivada del hecho punible podrá ser objeto de transacción. 2. Una vez que la transacción se formalice ante el Juez de la Investigación Preparatoria, respecto de la cual no se permite oposición del Ministerio Público, el Fiscal se abstendrá de solicitar reparación civil en su acusación.

**Artículo 15°.- Nulidad de transferencias.-** 1. El Ministerio Público o el actor civil, según los casos, cuando corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97 del Código Penal o cuando se trate de bienes sujetos a decomiso de conformidad con el artículo 102 del citado Código, que hubieran sido transferidos o gravados fraudulentamente,



sin perjuicio de la anotación preventiva y/o de otra medida que corresponda, solicitarán en el mismo proceso penal la nulidad de dicha transferencia o gravamen recaído sobre el bien. 2. El procedimiento se sujetará a las siguientes reglas:

- a) Una vez identificada una transferencia de un bien sujeto a decomiso o que puede responder a la reparación civil y que se considere incurso en lo dispuesto en el primer numeral del presente artículo, el Ministerio Público o el actor civil, introducirán motivadamente la pretensión anulatoria correspondiente e instará al Juez de la Investigación Preparatoria que disponga al Fiscal la formación del cuaderno de nulidad de transferencia. En ese mismo escrito ofrecerá la prueba pertinente.
- b) El Juez correrá traslado del requerimiento de nulidad al imputado, al adquirente y/o poseedor del bien cuestionado o a aquél en cuyo favor se gravó el bien, para que dentro del quinto día de notificados se pronuncien acerca del petitorio de nulidad. Los emplazados, conjuntamente con su contestación, ofrecerán la prueba que consideren conveniente.
- c) El Juez, absuelto el trámite o transcurrido el plazo respectivo, de ser el caso, citará a una audiencia dentro del quinto día para la actuación de las pruebas ofrecidas y escuchar los alegatos de los participantes. A su culminación, con las conclusiones escritas de las partes, el Juez dictará resolución dando por concluido el procedimiento incidental. Están legitimados a intervenir en la actuación probatoria las partes y las personas indicadas en el numeral anterior.
- d) El órgano jurisdiccional competente para dictar sentencia se pronunciará sobre la nulidad demandada. Todos los legitimados para intervenir en este incidente pueden participar en todas las actuaciones procesales que puedan afectar su derecho y, especialmente, en el juicio oral, en que podrán formular alegatos escritos y orales. En este último caso intervendrán luego del tercero civil.
- e) Esta pretensión también puede interponerse durante la Etapa Intermedia, en el momento fijado por la Ley

## **LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE**

### **Ley N° 27181**

#### **Título V - Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios**

**Artículo 29°.- De la responsabilidad civil.-** La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito, causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre, son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados.

## **EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (2010)**

### **Título VII - Infracciones y Sanciones**

#### **Capítulo I - Infracciones**

#### **Sección I - Aspectos Generales**

**Artículo 295°.- Responsabilidad Civil.-** El solo hecho de la infracción de tránsito no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor por los daños causados, si no existe relación causal entre la infracción y el daño producido por el accidente.

## **TÍTULO V NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL (2004)**

### **EL TERCERO CIVIL**

**Artículo 111. Citación a personas que tengan responsabilidad civil.-**

1. Las personas que conjuntamente con el imputado tengan responsabilidad civil por las consecuencias del delito, podrán ser incorporadas como parte en el proceso penal a solicitud del Ministerio Público o del actor civil.

2. La solicitud deberá ser formulada al Juez en la forma y oportunidad prevista en los artículos 100 - 102, con indicación del nombre y domicilio del emplazado y su vínculo jurídico con el imputado.

**Artículo 112.Trámite.-**

1. El trámite en sede judicial para la constitución en parte del tercero civil será el previsto -en lo pertinente- en el artículo 102, con su activa intervención.
2. Si el Juez considera procedente el pedido, mandará notificar al tercero civil para que intervenga en el proceso, con copia del requerimiento. También dará inmediato conocimiento al Ministerio Público, acompañando el cuaderno, para que le otorgue la intervención correspondiente.
3. Sólo es apelable la resolución que deniega la constitución del tercero civilmente responsable.

**Artículo 113. Derechos y garantías del tercero civil.-**

1. El tercero civil, en lo concerniente a la defensa de sus intereses patrimoniales goza de todos los derechos y garantías que este Código concede al imputado.
2. Su rebeldía o falta de apersonamiento, luego de haber sido incorporado como parte y debidamente notificado, no obstaculiza el trámite del proceso, quedando obligado a los efectos indemnizatorios que le señale la sentencia.
3. El asegurador podrá ser llamado como tercero civilmente responsable, si éste ha sido contratado para responder por la responsabilidad civil.

## **JURISPRUDENCIAS**

### **4.1 Acuerdos Plenarios Penales**

**Pleno Jurisdiccional de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República - Acuerdo Plenario N° 1-2005/ESV-22 (Ejecutoria que fija principios de obligatorio cumplimiento. Artículo 22 LOPJ) (2005)**

#### **Sobre la Reparación civil y confesión sincera - Resolución de Nulidad N° 948-2005-Junín**

**Tercero:** Que está fuera de toda discusión la culpabilidad del encausado en la comisión del hecho punible; que la impugnación se circunscribe al extremo de la determinación judicial de la pena de inhabilitación impuesta y al monto de la reparación civil; que la confesión sincera del citado encausado no puede ser valorada como presupuesto para establecer la cuantía de la reparación civil -que no es una pena-, en tanto que está reservada de ser el caso para rebajar la pena del confeso a límites inferiores del mínimo legal; que la naturaleza de la acción civil ex delito es distinta, pues tiene como finalidad reparar el daño o efecto que el delito ha tenido sobre la víctima y, consecuentemente, debe guardar proporción con los bienes jurídicos que se afectan; que de autos se advierte que el encausado A. Ch. se apoderó de \$ 1900 dólares destinados a la compra de computadoras para un centro educativo, lo que generó perjuicio tanto a la propia institución académica cuanto a los educandos; que, siendo así, el monto fijado por el Tribunal sentenciador por concepto de reparación civil se encuentra arreglado a ley.

#### **Ejecución de la reparación civil y constitución en parte civil – Resolución de Nulidad N° 1538-2005-Lima**

**Cuarto:** Que, en efecto, como ya ha sido establecido por esta Suprema Sala al amparar el presente recurso de queja, no hace falta que la víctima, declarada así por sentencia firme de condena, haya estado previamente constituida en parte civil desde el proceso

penal declaratorio de condena para intervenir en el proceso de ejecución y, como tal, participar en su desarrollo con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la reparación civil fijada a su favor; que la constitución en parte civil del agraviado sólo tiene sentido, desde una perspectiva de tutela de su derecho de participación procesal, en tanto persiga una concreta indemnización o reparación civil, que sólo una sentencia firme de condena puede estipular que declarado judicialmente el derecho indemnizatorio la intervención de la víctima para concretarlo en modo alguno no puede limitarse y, menos, exigirse al agraviado que con anterioridad se haya constituido en parte civil, pues ello vulneraría - como se hizo el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional que garantiza el acceso a los Tribunales a toda persona en resguardo de sus derechos e intereses legítimos; que a ello tampoco obsta que el agraviado haya promovido un juicio civil, en tanto que no está en discusión la determinación del monto de la reparación civil sino su cobro efectivo, respecto del cual, por cierto, debe tenerse en cuenta lo declarado y ejecutado en sede civil.

**Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias –  
Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 (2006)**

**La reparación civil en los delitos de peligro**

7. La reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del proceso penal y está regulada por el artículo 93° del Código Penal, desde luego, presenta elementos diferenciados de la sanción penal; existen notas propias, finalidades y criterios de imputación distintos entre la responsabilidad penal y responsabilidad civil, aun cuando comparten un mismo presupuesto: al acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen las diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil. Así las cosas, se tiene que el fundamento de la reparación civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse con “ofensa penal” –lesión o puesta en peligro de un jurídico protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente- [la causa inmediata de la responsabilidad penal

y la civil ex delicto, infracción/daño, es distinta]; el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos.

8. Desde esta perspectiva el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Una concreta conducta puede ocasionar tanto daños patrimoniales, que consisten en la lesión de derechos de naturaleza económica, que debe ser reparada, radicada en la disminución de la esfera patrimonial del dañado y en el no incremento en el patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada de percibir –menoscabo patrimonial-; cuanto daños no patrimoniales, circunscrita a la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales –no patrimoniales- tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas –se afectan, como acota Alastuey Dobón, bienes inmateriales del perjudicado, que no tienen reflejo patrimonial alguno...

9. Los delitos de peligro –especie de tipo legal según las características externas de la acción- pueden definirse como aquellos en los que no se requiere que la conducta del agente haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se requiere evitar [el peligro es un concepto de naturaleza normativa en cuanto a que su objeto de referencia es un bien jurídico, aunque su fundamento, además de normativo, también se basa en una regla de experiencia o de frecuente que es, a su vez, sintetizada en un tipo penal], sea cuando se requiere realmente la posibilidad de la lesión –peligro concreto- o cuando según la experiencia general representa en sí misma un peligro para el objeto protegido –peligro abstracto-...

10. A partir de lo expuesto, cabe establecer si los delitos de peligro pueden ocasionar daños civiles y, por tanto, si es menester fijar la correspondiente reparación civil, más allá de las especiales dificultades que en estos delitos genera la concreción de la responsabilidad civil. Como se ha dicho, el daño civil lesiona derechos de naturaleza económica y/o derechos o legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, de las personas. Por consiguiente, aun cuando es distinto el objeto sobre el recae la lesión en la ofensa penal y en el daño civil, es claro que, pese a que no se haya producido un

resultado delictivo concreto, es posible que existan daños civiles que deban ser reparados.

En los delitos de peligro, desde luego, no cabe negar a priori la posibilidad de que surja responsabilidad civil, puesto que en ellos –sin perjuicio, según los casos, de efectivos daños generados en intereses individuales concretos- se produce una alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los casos, para ocasionar daños civiles, sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la norma penal –que, por lo general y que siempre sea así, es de carácter supraindividual-. Esta delictiva alteración o perturbación del ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer, así como los efectos que directa o causalmente ha ocasionado su comisión [el daño como consecuencia directa y necesaria del hecho delictivo]...

Por consiguiente, no cabe descartar la existencia de responsabilidad civil en esta clase de delitos, y, en virtud, corresponderá al órgano jurisdiccional en lo penal determinar su presencia y fijar su cuantía. [...]”.

#### **IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial – Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116 (2008)**

##### **Naturaleza Jurídica de la reparación civil ex delicto**

24°. [...] Como se está ante una institución de naturaleza jurídico-civil, que descansa en el daño ocasionado, no en el delito cometido, y se proyecta, en cuanto a su contenido, a lo establecido en el artículo 93° del Código Penal, procesalmente está informada por los principios dispositivo y de congruencia.

La vigencia de los indicados principios, a tono con la naturaleza privada –y, por ende, disponible- de la responsabilidad civil ex delicto, determina que si no se cuestiona la reparación civil fijada en la acusación fiscal el Tribunal está limitado absolutamente a la cantidad acordada, esto es, no puede modificarla ni alterarla en su alcance o ámbito y magnitud. [...]”.

### **La reparación civil en sentencia posterior a la sentencia conformada**

“28°. ESTABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos ocho a veintitrés, la siguiente: [...].

8) La conformidad sobre el objeto civil está informada por los principios dispositivo y de congruencia. Si no se cuestiona la reparación civil no es posible modificarla. Debe respetar la pretensión civil alternativa de la parte civil. Es posible, si fuera el caso, la cesura del juicio para la actuación de pruebas en aras de la determinación de la reparación civil. Debe tomarse en cuenta para su concreción la suma global y la regla de la solidaridad en los supuestos de codelincuencia. La variación del monto de la reparación civil en la segunda sentencia no altera la fijada en la sentencia conformada”.

### **Reparación civil y cesura del juicio en sentencias conformadas (Apertura de prueba solo respecto a la reparación civil)**

25°. [...] Ahora bien, de no mediar acuerdo o aquiescencia de los interesados y, en ese caso, de no ser suficiente la mera lectura de la prueba documental y de las actuaciones documentadas –como establece el inciso 3) del artículo 5° de la Ley número 28122-, en la medida que el artículo 227° del Código ritual autoriza la actuación de prueba testifical y pericial para justificar la pretensión civil de la víctima, sin perjuicio de la prueba que en ese ámbito haya podido proponer la Fiscalía conforme al inciso 5) del artículo 225° del mismo Código, el Tribunal podrá fallar respecto de la responsabilidad penal y disponer la continuación del proceso para la actuación probatoria respectiva, en tanto se requiera una indagación, concreción probatoria y alegaciones ulteriores sobre ella.

La cesura del juicio que se establece, pretorianamente impuesta, deriva del respeto a la garantía de tutela jurisdiccional a favor de la víctima y de la imperiosa evitación de la indefensión material que le puede acarrear una decisión sin prueba, no obstante su necesidad procesal. La interpretación constitucional de la institución de la conformidad –específicamente del inciso 3) del citado artículo 5° de la Ley número 28122- desde los numerales 3) y 14) del artículo 139° de la Ley Fundamental, que reconocen las garantías procesales de tutela jurisdiccional y defensa procesal, así lo impone.



Esta conclusión no sólo no está prohibida por la ley, sino que no la tergiversa –no es incompatible con ella-, pese al silencio legislativo o, mejor dicho, a la presencia de una laguna legal. Si en una misma causa es posible, para un supuesto, dictar una sentencia conformada, y para otro, emitir –luego de la prosecución del juicio, bajo perspectivas de contradicción efectiva- una segunda sentencia; entonces, no existe impedimento alguno que se profiera una segunda sentencia, precedida de un juicio en forma, referida ya no a los objetos penal y civil –que es el supuesto anterior, contemplado en el numeral 4) de la Ley número 28122-, sino circumscripita exclusivamente al objeto civil, y sólo para los imputados conformados –es la regla, por lo demás, que ha establecido el apartado 5) del artículo 372° del Nuevo Código Procesal Penal-. [...].

28°. ESTABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos ocho a veintitrés, la siguiente: [...]

8) [...] Es posible, si fuera el caso, la cesura del juicio para la actuación de pruebas en aras de la determinación de la reparación civil. [...]”.

**Determinación del monto de la reparación civil y obligada a su pago en casos de conformidad parcial y sentencia posterior contra procesados que no aceptaron la conformidad.**

26°. Por último, es materia de discusión en el ámbito de la responsabilidad civil la determinación del monto y los obligados a cubrirlo cuando se trata de una pluralidad de copartícipes –codelinquencia-, varios de los cuales no se han sometido a la conformidad procesal. Sobre el particular, en los marcos de una sentencia conformada, es de tener en consideración dos aspectos sustanciales: el primero, referido a los alcances de la sentencia conformada: ésta sólo comprenderá a los imputados que se someten a la conformidad; y, el segundo, circunscrito al monto de la reparación civil, el cual está en función al daño global irrogado, bajo la regla de la solidaridad entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados (artículo 95° del Código Penal).

Siendo así, el Tribunal fijará el monto de la reparación civil de modo global [la cantidad en cuestión siempre será única, no puede dividirse], de suerte que como ésta

es solidaria si existieran copartícipes –y no mancomunada-, al emitirse condena contra ellos en el juicio sucesivo, si así fuera el caso, tal suma no variará y sólo se les comprenderá en su pago. Es posible, sin embargo, que en el juicio contradictorio la determinación del monto puede variar en virtud a la prueba actuada. En ese caso tal variación, de más o de menos, no puede afectar al fallo conformado, al haber quedado firme o ganado firmeza.

Por consiguiente, la variación sólo puede alcanzar a los acusados comprendidos en la condena objeto del juicio contradictorio. [...].

28°. ESTABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos ocho a veintitrés, la siguiente: [...]

8) [...] Debe tomarse en cuenta para su concreción la suma global y la regla de la solidaridad en los supuestos de codelincuencia. La variación del monto de la reparación civil en la segunda sentencia no altera la fijada en la sentencia conformada”.

**Corte Suprema de Justicia de la República VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria – Acuerdo Plenario N° 5 2011/CJ-116 (2011)**

**Aspectos Generales**

6°. El actor civil, en cuanto parte procesal, presenta una configuración jurídica de suma importancia, en la medida que esta institución ha generado interpretaciones contradictorias que con el tiempo han ido encontrando su cauce mediante las decisiones que han venido profiriendo los Juzgados y Salas, pero que al parecer no gozan de unánime respaldo. Así las cosas, corresponde a este Supremo Tribunal en aras de garantizar la igualdad en la aplicación judicial del derecho objetivo y la vigencia del valor seguridad jurídica, dictar un Acuerdo Plenario que fije los alcances de los puntos en conflicto.

7°. El Código Procesal Penal de 2004 establece que el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito; además, estipula que si éste último se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del

proceso: artículo 11°, apartado 1), del citado Código adjetivo. En tal virtud, la participación del Ministerio Público será por sustitución, esto es, representa un interés privado. Por ello, su intervención cesa definitivamente cuando el actor civil se apersona al proceso. Sin lugar a dudas, la modificación más importante del Código Procesal Penal en el ámbito de la acción civil incorporada al proceso penal se ubica en el artículo 12°, apartado 3), del referido Código, que estipula que la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda. Esto significa, en buena cuenta, que cuando se sobresee la causa o se absuelve al acusado no necesariamente la Jurisdicción debe renunciar a la reparación de un daño que se ha producido como consecuencia del hecho que constituye el objeto del proceso, incluso cuando ese hecho –siempre ilícito- no puede ser calificado como infracción penal.

## **4.2 Análisis de Jurisprudencias Ordinarias**

### **Casación N° 3141-2006-Callao (2007)**

Latino Leasing S.A. en liquidación interpone recurso de casación contra a sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, bajo los argumentos de interpretación errónea del art. 4 de la Ley de Arrendamiento Financiero (LAF) y la inaplicación del artículo 6 de la ley en mención y 23 del D.S. N° 559-84-EFC.

La Corte Suprema sostiene que el propietario del vehículo se encuentra legitimado pasivamente en el proceso de indemnización ya que la actividad de conducción es considerada como actividad riesgosa de conformidad con el art. 1970 del CC. Asimismo, precisa que el art. 4 de la LAF al disponer que la arrendadora financiera mantenga la propiedad del vehículo justifica que asuma la responsabilidad. Por otro lado, indica que el art. 6 de la LAF no resulta aplicable para exonerar de responsabilidad de la demandada Latino Leasing S.A. por cuanto que es aplicable únicamente a las relaciones que se dan entre las partes que celebran el contrato de leasing. Así pues, concluye señalando que la no aplicación de las normas especiales

del leasing no impide que se impute responsabilidad ya que esta tiene su fuente en la ley y no en el contrato.

Posteriormente se emite un voto discordante de los vocales supremos Sánchez-Palacios Paiva, Santos Peña, y Mansilla Novella, en el cual se señalan los siguientes considerandos: De acuerdo con el art. 1970 y la doctrina que lo informa, y como se ha venido estableciendo en reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, la sola propiedad de las cosas determina lo que se denomina responsabilidad objetiva, por los daños que estas puedan causar. Luego en su considerando sexto se sostiene que se identifican dos normas opuestas: por un lado, la regla Civil que establece la responsabilidad objetiva del propietario del bien; y por otro lado la norma que establece que cuando media un contrato de arrendamiento financiero la responsabilidad recae en el arrendatario del bien. Una norma de carácter general y otra especial, jus singulares. De acuerdo a los principios de aplicación de la ley, en este caso se debe preferir la norma especial, esto es lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo número 299. Por ello, se concluye que es fundada la denuncia de inaplicación del art. 6 de la LAF, de acuerdo al cual cuando media el arrendamiento financiero es responsable la arrendataria. Es por ello fundado el recurso de casación interpuesto por Latino Leasing S.A.

### **Casación N°1188-2011-Lima (2012)**

Interpuesta en contra de la sentencia de segunda instancia que revocando declara infundada para la empresa financiera TCF, reformándola declara la responsabilidad solidaria de esta y de la empresa de transportes precisando que “(...)el problema no radica en la interpretación del artículo 6 de la LAF sino en su aplicación: considerando que la indemnización está basada en el daño ocasionado a una niña originado en un accidente de tránsito, la responsabilidad está regulada en el artículo 29 de la LGTTT en atención al principio de especialidad por lo que corresponde aplicar la aludida ley, con exclusión de cualquier otra norma que presente alguna antinomia con su contenido. (...) al haber admitido Volvo Finance Perú Sociedad Anónima (ahora Financiera TCF Sociedad Anónima) ser propietaria del vehículo, en aplicación del

artículo 29160 de la norma antes aludida, resulta ser responsable solidario con la Empresa de Transportes Sol Peruano Sociedad Anónima Cerrada.”

La Corte Suprema en su considerando sexto señala: “Que, si bien el artículo 6 del Decreto Legislativo 299, establece que la arrendataria es responsable del daño que pueda causar el bien, desde el momento que lo recibe de la locadora, empero, no se puede soslayar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, artículo 29 señala textualmente: “La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados”.

En el considerando sétimo aplica el principio de especialidad precisando que “el Principio de Especialidad, supone “que la disposición especial prima sobre la general”, es decir, si dos normas con rango de Ley confluyen y establecen disposiciones contrarias, una referente a un aspecto general y otra al aspecto más especial y restringido, primará la “especial”; pues ante la concurrencia aparente de normas sobre una materia, tendrá la norma especial, validez sobre la general”.

La Corte Suprema concluye que la Financiera TFC S.A. es solidaria responsable por ser propietaria del vehículo que causo el daño, declarando infundado el recurso de casación interpuesto por la Financiera.

### **Casación N° 2025-2013-Lima (2014)**

La sentencia de primera instancia declara fundada en parte la demanda, ordenando que el BBVA Bco. Continental y la empresa de Transportes Tenorio E.I.R.L. paguen de forma solidaria a la demandante, la suma de S/. 245, 824.37 soles y S/. 7,208.96 soles, por conceptos de daño emergente y lucro cesante, más intereses legales. En segunda instancia, se confirma la apelada que declaro fundada en parte la demanda solo respecto a la empresa de Transportes Tenorio E.I.R.L., e improcedente la demanda respecto del BBVA Banco Continental, bajo los siguientes fundamentos: a) Mediante contrato de arrendamiento de fecha 20/12/2007, el BBVA Banco Continental dio en leasing a la empresa de Transportes Tenorio E.I.R.L. el vehículo causante del siniestro.

b) En la cláusula décimo primera se acordó que la arrendataria se obliga con el Banco a entregar y mantener una póliza de seguro contra todo riesgo, por el daño que pueda causar el uso del bien, emitida por una compañía de seguros a satisfacción del Banco, debidamente endosado a su favor. c) En la cláusula décimo tercera, en el ítem 13.2, se estipuló que la arrendataria asume la obligación de responder por los daños y perjuicios que se cause con el bien objeto del contrato, mientras este bajo su potestad y riesgo; el Banco queda facultado para repetir de la arrendataria las sumas que por ese concepto hubiera abonado en virtud del mandato judicial, sin reserva ni limitación alguna. d) El art. 6 de la LAF señala es responsable del daño que pueda causar el bien, desde el momento que lo recibe de la locadora; lo contrario implicaría desincentivar su aplicación en nuestro sistema. e) El Banco no resulta responsable por el daño ocasionado el juicio de responsabilidad debe efectuarse solo respecto de la empresa de Transportes Tenorio E.I.R.L.

La Corte Suprema de Justicia señala que no corresponde aplicar lo previsto en el segundo párrafo del art. 6 de la LAF ya que los hechos probados en autos, esto es, la pérdida de los vehículos de propiedad de la accionante, así como la carga que transportan, generan responsabilidad extracontractual frente a terceros que no han suscrito el contrato de arrendamiento financiero (leasing); más aún, si bajo el principio de especialidad de la norma, prima lo dispuesto en el art. 29 de la LGTTT. Siendo así, se concluye que ambas personas jurídicas son responsables solidariamente del daño ocasionado.

## **DERECHO COMPARADO**

### **5.1 El ordenamiento jurídico de la Reparación Civil**

Teniendo en cuenta el tratamiento que se viene dando dentro de la legislación nacional es necesario hacer un análisis del tema en la legislación internacional y verificar la aplicación de las normas del derecho comparado.

Iman Arce (2015), analiza a determinados países entre ellos:

#### **ARGENTINA**

**Constitución.-** Esta Nación, consagra en su Artículo 1 un régimen representativo, republicano y federal, siendo así permite la existencia de Estados Locales también conocidas como provincias que están facultadas para emitir sus propias constituciones que son como patrón obligatorio a la Constitución de la Republica. Constitución de 1994 asume posiciones de índole internacional, como el debido proceso plasmado en el Art. 18, donde se reconoce la inviolabilidad de la defensa en juicio, lo cual ha sido recogido por ejecutorias supremas de la Corte Nacional y ello en virtud de que debe otorgársele igualdad al trato a los participantes en un proceso judicial.

**Código Penal.-** Cuenta con un solo régimen, el cual ha sido objeto de modificaciones y de Leyes que han complementado la Ley Marco. El artículo 29 establece que la sentencia en caso que sea condenatoria debe señalar la indemnización del daño material y moral ocasionado que le corresponde a la víctima, a su familia o a un tercero, debiendo de fijarse una suma prudencial en base a las pruebas obrantes o a criterio del Juez, de esta forma se busca el resarcimiento por los actos causados.

**Código Procesal Penal.-** Además de la Procesal Nacional o Federal también existe las provinciales ambas señaladas en la Constitución y de ambas nace el Código Procesal de la Nación, así como los códigos de Provincia. El Código Procesal Penal Nacional de 1992, fijó como regla que el juicio sea oral y además público estableciendo las figuras del querellante, del actor civil y de la víctima, denominándolo

lesionado, damnificado u ofendido con la finalidad de darle mayor conocimiento a su rol incorporándose derechos de protección a la víctima del ilícito y de que sea atendido e informado sobre el estado del proceso. El Art. 174 reza que “toda persona que se considere lesionada por un delito cuya represión sea perseguible de oficio o que, sin pretender ser lesionada tenga noticias de él, podrá denunciarlo al Juez, al agente fiscal o a la policía...”.

**Actor Civil**, para la doctrina argentina es un “sujeto secundario y eventual de la relación procesal quien mediante una acción civil accesoria a la penal deduce la pretensión de resarcimiento basado en el mismo hecho que constituye el objeto de esa relación, requiriendo una sentencia favorable”, es decir dentro del proceso penal ya aperturado, la víctima se constituye en actor civil a efecto de buscar un resarcimiento por los daños sufridos, estando facultado de conformidad con el artículo 91 para acreditar el hecho delictuoso y los daños y perjuicios sufridos, pudiendo solicitar medidas cautelares para proteger sus intereses. (P.420-421).

En ese sentido afirma que “el hecho de la inserción de la acción civil en el proceso penal, nada dice contra el carácter privado de la pretensión que por medio de ella se hace valer. Esa inserción no cambia el carácter de la acción civil que, desde el punto de vista de la pretensión que la alienta, sigue siendo civil y privada. En otras palabras la acción resarcitoria no integra el sistema represivo del delito, permanece en la esfera privada” (Creus, 1985, P.28).

Ruis Vadillo (1994) refiere: “La acción civil no pierde su naturaleza por el hecho de ejercitarse en un proceso penal al que se incorpora, de tal forma que la circunstancia de ventilarse en éste para nada afecta a las características que le son propias y específicas”. El sistema argentino adopta un criterio similar, tal como lo indica Terragni (1997) afirma que los criterios por los que se buscaba considerar la obligación resarcitoria de índole penal no han prosperado y han quedado relegados en el tiempo.



Núñez (1982) que la acción civil siempre tiene carácter privado, cualquiera que sea su titular, porque tiende a reparar un perjuicio que interesa de manera inmediata y principal al damnificado.

Sin embargo, el artículo 16° del CPPN, indica que la acción civil dentro del proceso penal solo podrá ser ejercida mientras se encuentre pendiente la acción penal (dependencia) y hasta la clausura de la instrucción (art. 90 CPPN), de manera tal que si ésta no pueda proseguir por alguna causa legal, la acción civil podrá ejercitarse o continuarse en sede civil según lo prescripto en el art. 17 del CPPN (accesoriedad).

En nuestro sistema procesal nacional, sostenemos un igual criterio, de diferenciación del ejercicio de la acción penal con la acción civil, dado que uno tiene un carácter público, dirigido por el Fiscal y el otro por el mismo fiscal o el ofendido, siendo ello así, Prado Saldarriaga (2000), rechaza todo intento de considerar a la reparación civil como pena u otro tipo de sanción penal y afirma su naturaleza privada.

## **BRASIL**

**Constitución.-** Es una república federativa, regida por una constitución federal denominando a cada unidad como “Estado” los cuales poseen constituciones propias, teniendo competencia exclusiva para determinadas materias, sin embargo en materia penal y procesal penal existe una unidad legislativa.

**Código Penal.-** Considera a la víctima como el sujeto pasivo del delito, actuando los menores de edad o los incapaces en general, a través de sus representantes. En el caso de intereses difusos, el encargado es el Ministerio Público a efecto de que defiendan los intereses colectivos, sin perjuicio de que existan instituciones u organismos o asociaciones legales que también los defiendan.

**Código Procesal Penal.-** Utiliza el término víctima, como la persona ofendida, lesionada, así lo establece en los artículos 188 inciso 3°, como en el artículo 119 y 122 al referirse al lesionado como la persona perjudicada por un crimen. Tratándose de una acción pública centra la atención de la víctima a través del representante del Ministerio Público, así se encuentra plasmado en el art. 24, lo cual, si bien no es malo, si lo es en

cuanto a que este organismo va a buscar satisfacer sólo el interés del Estado que no es sino la sanción penal. “En caso de dictarse sentencia condenatoria, el sancionado está en la obligación de indemnizar, permitiéndose la ejecución civil conforme así también lo establece el Art. 91.1 del Código Penal y el art. 63 del Código Procesal Penal. El Código en sus artículos del 118 al 124 prevé dos formas de cumplir con los intereses del agraviado ya sea a través de la compensación o de la restitución del bien, que consiste en la devolución del bien.

## **REPÚBLICA DEL PARAGUAY**

Establece una responsabilidad dualista frente al propietario. Existe, (i) una responsabilidad subjetiva frente al propietario, independientemente de que el daño causado a la víctima haya sido producto de la cosa misma o con su uso, y para lo cual, podrá exonerarse probando que no existió culpa de su parte, es decir, acreditando su diligencia y cuidado sobre la misma; (ii) una responsabilidad objetiva cuando el daño causado por la cosa es producto de factores objetivos como el riesgo inherente a la cosa, como opera en el caso de los automotores, y frente a lo cual su propietario no podrá eximirse si consintió su uso en favor de otro, únicamente será posible acreditando la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero.

Consagra en el artículo 1847 del Código Civil, que: “El dueño o guardián de una cosa inanimada responde del daño causado por ella o con ella, si no prueba que de su parte no hubo culpa, pero cuando el daño se produce por vicio o riesgo inherente a la cosa sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. El propietario o guardián no responderá si la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta”. Tratándose de la actividad peligrosa desplegada con automotores, este ordenamiento jurídico, frente al propietario del automotor leasing consagra unos criterios de imputación objetiva y no a partir de su condición como guardián.

La legislación paraguaya, va un paso más adelante que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al considerar que mediante leasing, se pueden entregar bienes como los automotores, que llevan consigo la potencialidad del riesgo inherente,

por lo cual la responsabilidad es objetiva, frente a lo cual la teoría de la guarda carece de aplicación jurídica a la hora de reparar el daño a las víctimas.

No obstante lo anterior, la responsabilidad civil objetiva de la leasing como propietaria del vehículo, se reduce o contrae a tan solo el valor del automotor causante del daño, pues así lo dispuso la Ley de Locación, Arrendamiento o Leasing Financiero y Mercantil en ese país: La responsabilidad objetiva del dador ante el tomador emergente del artículo 1847 del Código Civil queda limitada al valor de la cosa entregada en locación, arrendamiento o Leasing financiero, cuyo riesgo o vicio fuere la causa del daño.

### **REPÚBLICA DE CHILE**

En el ordenamiento chileno existen dos momentos; el primero comprende el periodo que va desde el año 1997 al 2005, y otro, desde este último año hasta la actualidad, en el primero, las propietarias del automotor leasing, respondían de forma solidaria con el locatario y conductor del automotor entregado en leasing. El segundo periodo del régimen jurídico de la responsabilidad derivada del ejercicio de la actividad peligrosa en el ramo de la conducción de automotores. El legislador chileno cayó en una contradicción que evidentemente resquebraja la filosofía y esencia del art. 174 de la Ley de Tránsito e incluso la protección altruista a favor de las víctimas, produciendo una incoherencia en el tratamiento de la responsabilidad civil de los propietarios de automotores ante terceros. Dicha disparidad surgió cuando el legislador reformó la Ley de Tránsito, mediante la Ley 20.068 de 2005 abrió una puerta para que la responsabilidad del propietario de automotores leasing quedara limitada únicamente al valor patrimonial del vehículo causante del daño, extendiendo dicha reforma a todo propietario de un automotor que dentro de un contrato de arrendamiento haya pactado en favor del arrendatario una —opción de comprar; limitando de esta manera la responsabilidad extracontractual de aquel, como si se tratara de un propietario especial o calificado por el solo hecho de haber pactado contractualmente dicha opción.

Sin embargo, debe precisarse que en el régimen chileno, para que la opción de compra pueda ser alegada por el propietario del automotor como causal de exoneración, ésta debe ser inscrita en el correspondiente registro automotor y además

tener el carácter de irrevocable, esto es, que el propietario no puede declinar la opción concedida.

En la mentada reforma, al actual artículo 174 se le añadió un inciso final que consagra: —(...) —La responsabilidad civil del propietario del vehículo será de cargo del arrendatario del mismo cuando el contrato de arrendamiento sea con opción de compra e irrevocable y cuya inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados haya sido solicitada con anterioridad al accidente.

La noma no establece la condición de que el propietario-arrendador, deba estar adscrito al sistema financiero, lo que implicaría que (i) todo propietario-arrendador de vehículos, pacte una opción irrevocable, (ii) lo registre y, (iii) se exonere de cualquier responsabilidad extracontractual, el resultado material es (iv) una(s) víctima(s) desprotegida(s) frente a la obligación del propietario leasing, contrario a todo el esquema de responsabilidad objetivo que el mismo legislador le dispuso.

### **CAPÍTULO III**

#### **ANÁLISIS DEL PROBLEMA**

Se analiza el supuesto de la responsabilidad atribuida a los conductores – sujeto activo del delito. El sistema penal sanciona todas las conductas delictivas que vulneren, lesionen o alteren un bien jurídico protegido, muy aparte de esta sanción penal se le atribuye además las responsabilidades civiles, tanto al autor como a un tercero ajeno quien no tuvo participación en la realización del evento delictivo -accidente de tránsito-, y quien es incorporado porque el nexo con el responsable y como especie salvaguardia en los intereses económicos a favor del agraviado.

Los accidentes de tránsito hoy en día, se caracterizan por sus resultados generalmente fatales, significando ello, no sólo la pérdida de vidas humanas, sino también límites de proyectos de vida, cuando se trata de menores de edad, jóvenes, adultos y adultos mayores - por la condición de persona humana-, imposibles de compensar adecuadamente desde el punto de vista económico, sin embargo, nuestra gobernadores , a fin de menguar el daño causado y repara los perjuicios causados a la víctima, obliga al autor de los hechos, aparte del merecimiento de una sanción penal, a responder económicamente por lo ocasionado, no obstante, ante la falta de sustento económico del autor, y no dejar desamparado a la víctima, crea la institución del agente solidario o Tercero Civilmente Responsable, quien acompaña en el proceso penal al imputado, a fin de otorgarle la responsabilidad de la reparación civil al perjudicado, dado que, a éste le une un vínculo o nexo causal con el autor de los hechos, razón por la cual, se le obliga a participar en el cumplimiento de la reparación civil.

Que, en la actualidad se debe entender a la institución del Tercero Civil Responsable como a aquella persona natural o jurídica que conforma la parte acusada de un proceso penal, de carácter no esencial, que deberá responder, de manera eventual, por el pago de la reparación civil derivada de la realización de un delito, en el cual no ha participado como autor o partícipe, dado que, tuvo obligación configurada, de manera

previa o coetánea, a la producción misma del ilícito, pudiendo ser la fuente de esta obligación de carácter legal o convencional con la parte investigada.

Que, nuestro legisladores deberían realizar modificaciones referente a la normatividad de la Institución del Tercero Civilmente Responsable, dado que, si bien el Código Procesal Penal del 2004 le dedica algunos artículos, los mismos resultan insuficientes, tal como se puede avizorar en el día a día por las eventuales situaciones jurídicas que se presentan, en los delitos de accidentes de tránsito, donde en muchos casos no se ha podido establecer el nexo causal entre la parte imputada con el tercero obligado, en razón, de que se ha presentado algún tipo de contrato que no se encuentra desarrollado de manera extensa en nuestra legislación, como es el caso del contrato de leasing.

Que, respecto a la Institución del Tercero Civilmente, nuestro nuevo código procesal penal (2004), ha desarrollada de manera muy escasa esta figura procesal, contemplando solo tres articulados, dejando de lado, varios vacíos procesales, como el tema que se está desarrollando, esto es, el contrato de leasing ante los accidente de tránsito. Asimismo, el poco interés que despierta el Tercero Civil Obligado se evidencia en el hecho de no estar incorporado en todos los procesos penales, por lo que su estudio es limitado.

## CAPÍTULO IV

### CONCLUSIONES

- Primero.-** La responsabilidad civil, ha venido en una constante evolución desde su orígenes hasta la actualidad, en el imperio o sistema Romano, se caracterizó por tener una marca raigambre de acción privada, esto la “venganza de propia mano”, por parte del perjudicado o núcleos familiares de éste, hasta poder llegar a ser meritorio de una sanción penal por parte del Estado, acompañado de un fin reparatorio, por las consecuencias generadas del evento delictivo, siendo que el resarcimiento de lo dañado, se regía por las reglas de la sanción penal.
- Segundo.-** 2.1.- El tercero civilmente responsable, es el sujeto, que a raíz de un vínculo contractual o extracontractual, con el autor de los hechos, lo hacen partícipes, el proceso, para que acompañe a este a responder solidariamente por las consecuencias civiles, que indemnizan el daño causado, no obstante, a éste sujeto no tiene la condición de algún merecimiento de responsabilidad penal, sino solamente en el ámbito civil.
- 2.2.- El contrato de leasing se expande cada vez más en el Perú, constituyendo una parte juega un papel importante en el parque automotor, se trata de un contrato comercial de gran envergadura dentro del sistema financiero de automotores; sin duda alguna, un constante generador de riesgo para la población, que afecta derechos fundamentales como la vida, salud, integridad física, y el patrimonio de las personas.
- Tercero.-** 3.1.- Que si bien nuestra legislación procesal, ha venido realizando, diferentes modificaciones, se advierte que en los últimos años, no está dirigida a garantizar o desarrollar las facultades de actuación de la parte acusada, esto es, del imputado y del Tercero Civil Obligado; sino que, sus esfuerzos están dirigidos a otorgar mayor respaldo y facultades a la parte acusadora y a las instituciones que colaboran con sus actuaciones,

estos son, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Actor Civil.

- Cuarto.-** Que, en la actualidad se encuentra muy escasa en nuestra jurisprudencia, sobre el sujeto procesal, denominado Tercero Civil Obligado o solidario, dado que, en la mayoría de casos solo se ha venido desarrollando, el aspecto punitivo de la norma, como medio o fin de la lucha contra la delincuencia o la criminalidad. Ello, a pesar que sí importa de manera indirecta, para atender la reparación civil de la víctima, la cual no sólo reclama sanciones penales sino el resarcimiento de los daños ocasionados con el delito.
- Quinto.-** No existe un desarrollo normativo uniforme en la doctrina ni en la jurisprudencia nacional y extranjera respecto a la figura del Tercero Civil Obligado, como consecuencia de los delitos de accidente de tránsito.
- Sexto.-** Que el caso materia de estudio, se tiene que el Primer Juzgado De investigación Preparatoria – Sede Central Huacho, declaro fundado la constitución de Incorporación Como Tercero Civilmente Responsable A La Persona Jurídica Turismo Días S.A. Y Empresa La Positiva Seguro Y Reaseguros, En El Proceso Seguida Contra Alexander Martínez Alva, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de Homicidio Culposo, en agravio de Anayeli Luana Laiza Alayo; y Lesiones Culposas Graves, en agravio de Emerson Jesús Huamán Alayo, dado que, estableció, en un primer lugar que el investigado Alexander Martínez Alva, que el día de ocurrido el accidente de tránsito, éste conducía placa de rodaje B3T.957, el cual era de propiedad de la empresa Turismo Días S.A., con el cual mantenía además un vínculo contractual, sin embargo, en el desarrollo de la investigación se advirtió que la Empresa Turismo Díaz S.A., mantenía un contrato de seguros, con la Empresa La Positiva Seguro y Reaseguros, razón por la cual, también se requirió su incorporación, siendo que el juzgado declaro fundado, ya que se acredito que esta iba a cubrir la cobertura de daño propio y responsabilidad civil, que se ocasionaran.



## CAPÍTULO V

### RECOMENDACIONES

**Primero.-**Que, si bien en el transcurso de la historia, la institución del tercero civil, no estuvo desarrollado, dado que, solo se le atribuía la responsabilidad al agente causante del daño, sin importarle, que pasaría si éste no tendría los medios para poder resarcirlos, sin embargo, dicho acontecimiento quedo en la historia, por lo que en la actualidad, no debe solo enfocarse solo en el autor del delito, sino por el contrario buscarla forma en que el resarcimiento del daño que se ha ocasionado sea cubierto en su totalidad, a efectos de que la víctima pueda sentirse tranquila, y que de una u otra manera calmar el la afectación de su estado norma –respecto a los delitos de accidentes de tránsito-.

**Segundo.-**Es importante y necesario que nuestro juristas desarrollen esta institución con mayor cautelo y de forma amplia, con la finalidad de evitar errores y/o arbitrariedades, pues, –ante la carencia del tratamiento preciso y claro de dicho sujeto procesal- se puede cometer errores en la determinación o exclusión de una persona bajo dicha condición, esto es, en inmiscuirlo dentro de un proceso penal, con la finalidad de que cumpla el rol de garante ante una eventual sanción, hacia el autor de los hechos.

**Tercero.-**Que, tanto a nivel nacional y extranjero, deberían formar lineamientos uniformes respecto al tratamiento de la institución del Tercero Civilmente responsables, o también llamado Tercero Solidario o Tercero Obligacional Secundario, en el sentido, de darle un papel preponderante en el desarrollo del procedimiento penal, tanto a nivel de su participación como garantías procesales, a efectos de poder salvaguardar los intereses de aquel que entra al proceso, sin haber tenido un grado mínimo en la realización del evento delictivo, tanto como cómplice o autor, pudiendo éste, formular excepciones o aportar pruebas, ya que, si se comprobara la inocencia del investigado, se le eximiría de responsabilidad civil a éste, no

obstante, se puede ver, las legislaciones mencionadas limita la participación de poder apelar la constitución del tercero como obligante solidario, estableciendo únicamente que se podría apelar la denegatoria de ésta.

**Cuarto.-**Que, en el caso de estudio el Juzgado de Investigación Preparatoria, realizo una correcta interpretación del nexo causal, entre la parte imputada y los terceros solidarios, siendo que en el presente caso valoro, los medios ofertados por parte del Ministerio Público, para entablar en un primer lugar el vínculo con la Turismo Días S.A., quien era propietario del vehículo y empleadora del investigado, para que posteriormente emplazar el vínculo generado con la Empresa La Positiva Seguro y Resaguros, quien entro en la condición de garante ante cualquier suceso natural en representación de la empresa contratante - Turismo Días S.A.-, en consecuencia se tiene que en un proceso judicial, puede haber más de un tercero solidario, que puede responder solidariamente por el concepto de reparación civil, siempre y cuanto en la materialización del delito se encuentre vigente el vínculo con éste.

## CAPÍTULO VI

### REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

#### 6.1 Fuentes Bibliográficas

- Morales Silva, S., & Montoya Castillo, C. F. (2018). *Código Civil*. Breña, Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.C.
- Torres Vásquez, A. (2012). *Teoría General del Contrato* (Primera ed., Vol. Tomo II). Breña, Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.
- Torres Vásquez, A. (2014). *Teoría General de las Obligaciones* (Primera ed., Vol. II). Breña, Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.
- NUÑEZ, Ricardo C. *La Acción Civil en el Proceso Penal*. Córdoba: Editora Córdoba, 1982. Enciclopedia Jurídica Omeba, I-A,
- Juan Carlos Marín G. *La acción civil en el nuevo código procesal penal chileno: su tratamiento procesal. Revista de Estudios de la Justicia. 2005. Santiago Chile*
- Coral Arangüena Faneco. *Teoría General de las Medidas Cautelares Reales en el Proceso Penal Español*. Bosch, Barcelona. 1991.
- Jorge R. Moras Mom (2002). La acción civil reparatorio y el proceso penal. (p.80).
- José María Rifa Soler. Derecho procesal penal. Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra. Pamplona, 2006. (Pag.143).
- Guillermo Cabanellas. *Diccionario enciclopédico de derecho usual, 15° Edición, Heliasta. Buenos Aires. 1981. Tomo VII (Pag.191).*
- Valdivia Rodríguez, C. M. (2017). Aspectos relevantes en la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito. En I. Pacífico, *Actualidad Civil* (Marzo 2017 ed., Vol. 33, págs. 169 - 190). Breña, Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.C.
- Casación N° 3622-00-Lima ( Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 21 de 03 de 2001).

Casación N° 2388-2003-Lima (Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 13 de 07 de 2004).

Casación N° 3141-2006-Callao (Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República 12 de 10 de 2007).

Casación N° 1188-2011-Lima (Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 27 de 01 de 2012).

Casación N° 2025-2013-Lima (Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República 02 de 06 de 2014).

Corte Suprema de Justicia de la República . (06 de Diciembre de 2011). VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES. *ACUERDO PLENARIO N° 5-2011/CJ-116* . Lima, Lima, Perú.

Corte Suprema de Justicia de la República VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria . (06 de 12 de 2011). *Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116*. Lima, Lima, Perú.

IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial . (18 de 07 de 2008). *Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116*. Lima, Lima, Perú.

Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias . (13 de 10 de 2006). *Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116*. Lima, Lima, Perú.

Pleno Jurisdiccional de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República. (30 de 09 de 2005). *Acuerdo Plenario N° 1-2005/ESV-22*. Lima, Lima, Perú.

## 6.2 Fuentes Electrónicas

Abanto Torres, J. D. (s.f.). *La responsabilidad civil por accidentes de tránsito en la jurisprudencia*. Obtenido de Jurisprudencia civil patrimonial y de consumo. Dialogo con la Jurisprudencia N° 155: [http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/125/2014/09/20130526-08\\_rjp\\_dialogo\\_155\\_-\\_civil\\_pat.pdf](http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/125/2014/09/20130526-08_rjp_dialogo_155_-_civil_pat.pdf) (Extradido: 26 enero de 2018 a las 10:30 horas)

- Araujo Moreno, A. J. (2017). *La regulación de la responsabilidad solidaria del arrendador financiero en el contrato de leasing*. Obtenido de Tesis para optar el título profesional de abogado: [http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/2877/1/RE\\_DERE\\_ALI\\_DA.ARAUJO\\_REGULACION.DE.LA.RESPONSABILIDAD\\_DATOS.pdf](http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/2877/1/RE_DERE_ALI_DA.ARAUJO_REGULACION.DE.LA.RESPONSABILIDAD_DATOS.pdf) (Extradido: 23 enero de 2018 a las 11:56 horas)
- Iman Arce, R. (2015). *Criterios para una correcta interpretación de la reparación civil en sentencia absolutoria en el Nuevo Código Procesal Penal*. Obtenido de Tesis para optar el título de abogada: <http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/617/DER-YAI-HID-15.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Extradido: 23 enero de 2018 a las 18:27 horas)
- Ley de Arrendamiento Financiero*. (26 de 07 de 1984). Obtenido de [http://galvezconsultores.com/pdf-normas/LEASING%20\(D.Leg.299\).pdf](http://galvezconsultores.com/pdf-normas/LEASING%20(D.Leg.299).pdf) (Extradido: 25 enero de 2018 a las 20:36 horas)
- Ley de General de Transporte y Tránsito Terrestre*. (07 de 10 de 1999). Obtenido de [http://transparencia.mtc.gob.pe/idm\\_docs/normas\\_legales/1\\_0\\_3106.pdf](http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3106.pdf) (Extradido: 25 enero de 2018 a las 22:15 horas)
- Morales Gonzales, S. (Julio de 2017). *La Responsabilidad Extracontractual del propietario en los casos de accidentes de tránsito en el marco de un contrato de leasing*. Obtenido de [https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3209/DER\\_105.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3209/DER_105.pdf?sequence=1&isAllowed=y) (Extradido: 01 de febrero de 2018 a las 20:00 horas)
- Padilla Alegre, V. K. (2016). *El Tercero Civil Responsable. Análisis crítico sobre sus alcances, límites y problemas en el proceso penal peruano que permiten determinar si ¿es posible realizar una definición universal?* Obtenido de Tesis para obtener el grado académico de: Magíster en Derecho Penal. PUCP:

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/download/15595/160>

44. (Extradido: 01 de febrero de 2018 a las 15:00 horas)

Páucar Gómez, A. (2013). *Criterios Jurídicos para la determinación de la responsabilidad civil en los accidentes de tránsito*. Obtenido de Para obtener el Grado Académico de Magister en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial: [http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/3323/P%Elucar\\_ga.pdf?sequence=1](http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/3323/P%Elucar_ga.pdf?sequence=1) (Extradido: 15 de febrero de 2018 a las 22:34 horas)

*Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito*. (07 de 07 de 2010). Obtenido de [https://www.rimac.com.pe/uploads/Reglamento\\_Nacional\\_de\\_Transito.pdf](https://www.rimac.com.pe/uploads/Reglamento_Nacional_de_Transito.pdf) (Extradido: 27 de febrero de 2018 a las 19:34 horas)

Tintaya Cari, C. G. (2015). *Criterio jurídicos para la determinación de la responsabilidad civil en los accidentes de tránsito distrito judicial Puno*. Obtenido de Tesis para optar el grado académico de magíster en Derecho: <http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/417/P29-011.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Extradido: 27 de febrero de 2018 a las 20:53 horas)

Valdivia Rodríguez, C. M. (19 de setiembre de 2017). *Actos relevantes sobre la actualidad de la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito*. Obtenido de Legis.pe: [file:///G:/TERCERO/Aspectos%20relevantes%20sobre%20la%20actualidad%20de%20la%20responsabilidad%20civil%20derivada%20de%20accidentes%20de%20tr%C3%A1nsito%20\\_%20Legis.pe.html](file:///G:/TERCERO/Aspectos%20relevantes%20sobre%20la%20actualidad%20de%20la%20responsabilidad%20civil%20derivada%20de%20accidentes%20de%20tr%C3%A1nsito%20_%20Legis.pe.html) (Extradido: 12 de marzo de 2018 a las 20:45 horas)

Villa Santander, L. F. (2016). *La responsabilidad civil extracontractual y solidaria de la sociedad de leasing en el escenario del contrato de leasing automotor*. Obtenido de Trabajo de Grado para optar al título de abogado: <http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/91548.pdf> (Extradido: 23 enero de 2018 a las 15:00 horas).

